



GD-F-008 V.9

Página 1 de 9

**RESOLUCIÓN No. SSPD - 20174010000395 DEL 13/01/2017**

**"Por la cual se resuelve un recurso de reposición"**

**EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO**

En ejercicio de las atribuciones conferidas en el parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007, en el artículo 2.3.5.1.2.1.5. del Decreto 1077 de 2015, en la Resolución No. SSPD 20111300032265 de 2011, la Ley 1437 de 2011 y,

**CONSIDERANDO:**

**1. ANTECEDENTES**

Que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) de conformidad con lo previsto en el Parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007, mediante la cual *"se desarrollan los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones"*, es la entidad competente para adelantar el proceso de certificación relacionado con la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones para agua potable y saneamiento básico (SGP-APSB) o de retirarla según sea el caso, a los distritos y municipios del país.

Que el artículo 2.3.5.1.2.1.5. del Decreto 1077 de 2015, estableció que *"La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios adelantará el proceso de certificación de acuerdo con lo establecido en el parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007"*.

Que el Superintendente de Servicios Públicos mediante Resolución No. SSPD 20111300032265 del 21 de octubre de 2011, delegó en el Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo entre otras funciones, la de expedir los actos administrativos mediante los cuales se decida sobre la certificación de municipios relacionada con la administración de los recursos del SGP-APSB a que se refiere el parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007, en concordancia con el Decreto 1077 de 2015; resolver los recursos que contra ellos se presenten y en general la de ejercer todas las actuaciones previstas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (C.P.A.C.A.), para adelantar los procedimientos administrativos.

Que el Municipio de TORO del Departamento de VALLE DEL CAUCA, es de categoría 6 y como no fue prestador directo de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo a 31 de diciembre de 2015, para obtener la certificación relacionada con la administración de los recursos del SGP-APSB, debía acreditar el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 2.3.5.1.2.1.6 del Decreto 1077 de 2015.

Que mediante Resolución No. SSPD 20164010056005 del 30 de septiembre de 2016, la SSPD decidió DESCERTIFICAR al Municipio de TORO Departamento de VALLE DEL CAUCA, por no haber cumplido el siguiente requisito previsto en el artículo 2.3.5.1.2.1.6. del Decreto 1077 de 2015:

*"Reporte en el SUI de la certificación expedida por la Secretaría Técnica del Comité Permanente de Estratificación Municipal o Distrital o quien haga sus veces, en la que conste que la estratificación aplicada en la vigencia a certificar está conforme a la metodología nacional establecida."*

La Resolución No. SSPD 20164010056005 del 30 de septiembre de 2016, se notificó por aviso el 5 de diciembre del 2016.

Que el ente territorial, mediante documento radicado en esta entidad bajo el número SSPD 20165290854242 del 14 de diciembre del 2016, presentó oportunamente recurso de reposición en contra la resolución de descertificación.



## 2. ARGUMENTOS DEL MUNICIPIO Y PRUEBAS APORTADAS CON EL RECURSO DE REPOSICIÓN

2.1 Como argumentos del recurso, se alegaron los siguientes por parte del alcalde municipal:

### "1. PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS

#### **Alcances y efectos de la Delegación en la Expedición de Actos Administrativos**

Según el art. 9 de la ley 489 de 1998 la delegación es procedente del superior a su subalterno siempre y cuando medie previamente un acto administrativo de autorización expresa de la función delegada, se respeten los respectivos recursos de la regla general de que trata el código de procedimiento contencioso administrativo y el código administrativo y que el delegante ejerza plenamente el control y vigilancia sobre las decisiones que en virtud de la delegación se profiera por el delegado, en razón que según el art. 1101 ibídem el control y la regulación son de naturaleza indelegable. En sentencia T-705/98 la Corte Constitucional resuelve frente a los requisitos previos de la delegación de funciones en estos términos y alcances

"DELEGACION DE FUNCIONES- Requiere de ley previa que la autorice

Colombia es un Estado social de derecho y, en éste, la validez del ejercicio del poder público por parte de las autoridades constituidas está condicionada a la adscripción constitucional o legal de las funciones. Este principio fundamental de la organización política nacional se encuentra desarrollado en los artículos 121, y 122 de la Carta Política, sobre los cuales se fundamenta el desarrollo legal del sistema de responsabilidad exigible a los servidores públicos, quienes responderán ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes, y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. La desconcentración, mecanismo consistente en la delegación de funciones en otras autoridades o en los subordinados de aquélla a la cual fueron atribuidas por la Constitución o las leyes, ciertamente está previsto como válido en el Estatuto Superior, pero siempre sometido a la vigencia de ley previa que expresamente autorice la delegación y establezca los recursos que se pueden interponer contra los actos de los delegatarios, así lo establece con claridad el artículo 211 de la Carta Política".

Obra como antecedente que ante la delegación surtida mediante resolución No. SSPD 20111300032265 de 21 de octubre de 2011 del Superintendente de Servicios públicos domiciliarios en su subalterno el Superintendente delegado de Agua Potable y Saneamiento Básico es procedente el recurso de reposición con subsidio de apelación, de conformidad con el art. 74 de la ley 1437 de 2011 mediante el cual se determinan los casos en que opera los recursos de reposición con subsidio de apelación contra los actos administrativo, concatenado con el art. 2.3.5.2.1.10 del decreto 1077 de 2015 y el art. 113 de la ley 142 de 1994, normas especiales determinan el procedimiento para expedir la certificación, precisando taxativamente que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios aplicará para el proceso de certificación de los municipios de que trata el art. 2.3.5.1.2.5 del decreto 1077 de 2015 conforme a lo establecido en el artículo 4o de la Ley 1176 de 2007 y no acorde a lo contemplado en el decreto 028 de 2008, que es otra acción distinta a la descertificación que obra de manera inmediata ante un riesgo inminente como resultado de un monitoreo y control en cualquier momento a los municipios por parte del Gobierno nacional.

Es claro a todas luces claro que el acto administrativo de descertificación de los municipios se sujeta a las normas del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en lo que se refiere a la actuación administrativa, notificaciones, pruebas y recursos, tal cual como se prohija en el art. 2.3.5.2.1.10 del decreto 1077 de 2015, que a la letra dice:

"Artículo 2.3.5.2.1.10 del decreto 1077 de 2015. Procedimiento para expedir la certificación. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios así como el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio definirá sus protocolos para la revisión de la información y de los requisitos que a cada uno de ellos corresponde verificar.

**La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios aplicará las normas del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en lo que se refiere a la actuación administrativa, notificaciones, pruebas y recursos.**

El acto administrativo en firme que resulte del proceso de certificación expedido por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, ordenará comunicar al Departamento Nacional de Planeación, al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al respectivo departamento, el contenido de la Resolución para efectos del cumplimiento de lo previsto en el artículo 5o de la Ley 1176 de 2007 y su posterior publicación en la página web institucional de la SSPD. " (Subraya negrilla y cursiva para resaltar.

En consecuencia, corresponde a la superintendencia de servicios públicos como entidad encargada de expedir el acto administrativo de descertificación cumplir con lo mandado en el art. 74 de la ley 1437 de 2011, determinante de la regla general contra los actos definitivos procederán los siguientes recursos:

1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o revoque.
2. El de apelación, para ante el inmediato superior administrativo o funcional con el mismo propósito.

No habrá apelación de las decisiones de los Ministros, Directores de Departamento Administrativo, **superintendentes** y representantes legales de las entidades descentralizadas ni de los directores u organismos superiores de los órganos constitucionales autónomos.

En aplicación en estricto derecho, esta ley exceptúa el recurso de apelación contra los actos expedidos directamente por los superintendentes como máxima autoridad de estos órganos; pero no le es aplicable contra los actos administrativos expedidos por delegación del Superintendente en sus subalternos como son los delegados del servicio de agua potable y saneamiento básico, quien es por competencia delegada a quien le corresponde expedir el acto administrativo recurrido que hoy se complementa a través de este escrito y sobre quien en primera instancia se surte el recurso de reposición y ante el Superintendente de servicios públicos el recurso de apelación, por ser el mecanismo a través del cual se despliega el control de la función delegada por parte del delegante.

En gracia de discusión se suma a ello, la ley especial de servicios públicos domiciliarios en su inciso del art. 113 corrobora que cuando hay delegación por parte de funcionarios distintos al Presidente de la República cabrá el recurso de apelación:

**"ARTÍCULO 113. RECURSOS CONTRA LAS DECISIONES QUE PONEN FIN A LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS.** Salvo esta Ley disponga otra cosa, contra las decisiones de los personeros, de los alcaldes, de los gobernadores, de los ministros, del Superintendente de Servicios Públicos, y de las comisiones de regulación que pongan fin a las actuaciones administrativas sólo cabe el recurso de reposición, que podrá interponerse dentro de los cinco días siguientes a la notificación o publicación.

Pero, **cuando haya habido delegación de funciones**, por funcionarios distintos al Presidente de la República, contra los actos de los delegados cabrá el recurso de apelación.

Durante el trámite de los recursos pueden completarse las pruebas que no se hubiesen alcanzado a practicar".

Queda demostrado que frente al acto administrativo de descertificación procede el recurso de reposición solamente cuando es expedido directamente por el Superintendente y cabe el recurso de apelación cuando quien lo expide lo hace en función delegada, quedando sin piso legal el procedimiento contemplado en el art. 10 del decreto 028 de 2008, el cual es de exclusividad para aquellos actos administrativos dictados en cumplimiento del monitoreo, donde se evidencia un eminente riesgo a los cuales solo procede el recurso de reposición con efecto devolutivo, como así se lee a continuación:

"Artículo 10 decreto 028 de 2008. Procedimiento para la adopción de medidas. Las medidas se adoptarán mediante acto administrativo debidamente motivado, el cual indicará el evento o eventos de riesgo encontrados, la evidencia que amerita la adopción de la correspondiente medida, el término durante el cual estará vigente, y las acciones a emprender por parte de la entidad territorial.

El acto administrativo es de aplicación inmediata y contra este sólo procede el recurso de reposición, el cual se concederá en el efecto devolutivo.

La adopción de las medidas se efectuará por parte de la entidad responsable atendiendo los criterios de razonabilidad, proporcionalidad, continuidad y restablecimiento de la prestación de los servicios. "

#### **Corolario de la procedencia de los recursos**

En virtud de lo esgrimido, es claro y evidente que frente al acto administrativo No. SSPD 20164010746181 del 10/11/2016 de descertificación del Municipio de Toro expedido por el Superintendente delegado de Agua Potable y Saneamiento Básico procede el recurso de reposición con subsidio de apelación en los términos y alcances del art. 74 de la ley 1437 de 2011 y el art. 113 de la ley 1452 de 1994, el cual en mi condición y de Alcalde y representante legal interpongo el recurso de reposición con subsidio de apelación contra el acto disertado.

## **2. MOTIVO DE INCONFORMIDAD CONTRA EL ACTO ADMINISTRATIVO DE LA DESCERTIFICACION RECURRIDO**

Teniendo en cuenta que el bien jurídico protegido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad Territorio MVCT y la Superintendencia de Servicios Públicos domiciliarios es la administración de los recursos del SGP APSB y el aseguramiento de la prestación del servicio públicos domiciliarios, tal cual como se predica en el decreto 1077 de 2015 en sus arts. 2.3.1.2.1.14 y 2.3.1.2.1.15 respectivamente, no ha sido demostrado por la Superintendencia como entidad encargada de imponer la descertificación al Municipio de Toro que la estratificación aplicada en la vigencia 2015 NO estuvo conforme a la metodología nacional establecida y que ella implicaría un eminente riesgo para el manejo de los recursos del SGP APSB y el aseguramiento de los servicios públicos de APSB.

Sustenta el acto administrativo en una simple ritualidad de carácter formal, para el efecto se anexa acta del comité donde se aclara en los términos exigidos por la superintendencia, no obstante, se deja constancia, que el contenido material de la primer acta implica que la metodología aplicada es la vigente, hecho que le consta a la propia superintendencia pues a la fecha el gobierno nacional no ha expedido Si es de intención del organismo de control y vigilancia se cumplan protocolos de forma fuera del mandato legal como es el contenido del acta de certificación con palabras y precisiones taxativas, lo más dable es

que se diseñen formatos a diligenciarse por las entidades territoriales para que la simple forma no sea un causal de impedir el camino del mandato constitucional de autonomía y descentralización propio de los municipios lesionados por un simple lío de palabras.

Se centra este recurso a que no puede desdibujarse que cuando el Municipio en su acta certifica que el Comité de Estratificación se encuentra funcionamiento conforme a la metodología nacional establecida 2015 es de bulto ratificar que la estratificación socioeconómica 2015 aplicada por el Municipio de Toro estuvo conforme a la metodología nacional establecida,

Interrumpir un mandato constitucional cercenando la autonomía y descentralización de los entes territoriales no puede basarse en meras formas y sin soportarse en un mecanismo probatorio que sustente que el municipio de Toro no cumplió con el literal c) del art. 4 de la ley 1176 de 2007 y no es de pleno derecho basarse en supuestos y protocolos que no evidencian un riesgo eminente, ni muchos menos un mal manejo de los recursos del SGP de APSB por parte de la actual administración del ente territorial del nivel municipal que obliguen la alternativa de solución para la toma de medidas imperativas y severas como la de descertificar al municipio de Toro despojándolo de su derecho contemplado en los arts. 1, 287 y 365 de nuestra carta magna de asegurar la prestación de los servicios públicos domiciliarios de APSB como en la administración de los recursos del SGP de APSB que tiene acceso de acuerdo a los arts. 356 y 357 constitucionales.

Visto lo anterior desde nuestra fuente del derecho, el principio de la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, está consagrado en nuestra constitución nacional en el artículo 228, el cual contempla que en las actuaciones de la administración de justicia prevalecerá el derecho sustancial. Este principio, busca que las formalidades no impidan el logro de los objetivos del derecho sustancial, y siempre que el derecho sustancial se pueda cumplir a cabalidad, el incumplimiento o inobservancia de alguna formalidad, no debe ser causal para que el derecho sustancial no surta efecto.

En ese orden de ideas, no se ha demostrado por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos que el Municipio no cumpla con el literal c) de la ley 1176 de 2007 porque lo consignado en un acta es una mera formalidad que no prima sobre la sustancial que es efectivamente que el Municipio si sometió la estratificación socio económica de 2015 a las metodologías nacionales establecidas, lo cual se puede verificar por diferentes medios probatorios entre los cuales da cuenta la inspección ocular de esta estratificación que a bien puede el ente certificar configurar la respectiva prueba para que obre en pleno derecho y valorar la prueba de la función principal del comité de estratificación de acuerdo a lo incoado por el art. 101.5 de la ley 142 de 1994.

Toma fuerza lo esgrimido por mí en este recurso en la Sentencia de Tutela de la Corte Constitucional T-1306 de 2001, frente al alcance de la prevalencia del derecho sustancial: "El procedimiento no es, en principio, ni debe llegar a ser impedimento para la efectividad del derecho sustancial, sino que debe tender a la realización de los derechos sustanciales al suministrar una vía para la solución de controversias sobre los mismos. Cuando surge un conflicto respecto de un derecho subjetivo, es el derecho procesal el que entra a servir como pauta válida y necesaria de solución de la diferencia entre las partes. Se debe tener siempre presente que la norma procesal se debe a la búsqueda de la garantía del derecho sustancial. Teniendo en claro la prevalencia que en la administración de justicia debía tener el derecho sustancial, el constituyente de 1991 lo estableció como principio de la administración de justicia en el artículo 228 al consagrar que en las actuaciones de la administración de justicia "prevalecerá el derecho sustancial". La Constitución consagra el respeto de los derechos fundamentales, lo cual implica que esta protección debe prevalecer sobre normas procesales que de ser aplicadas conducirían a la negación de los mismos.

Dada las circunstancias anteriores y con el ánimo de continuar dando el buen uso de los recursos del SGP-APSB anexamos el acta de certificación nuevamente expedida por el comité permanente de estratificación, con el fin de dar cumplimiento estricto a lo solicitado por la superservicios.

### 3. PRETENSION

Se solicita a través de este recurso a la Súper intendencia de Servicios Públicos domiciliarios modificar la Resolución Numero SSPD 20164010746181 DEL 10/11/2016 por medio de la cual descertifica al municipio de Toro por no cumplir con el literal c) del art. 4 de la ley 1176 de 2007 y en su defecto, se CERTIFIQUE al Municipio de Toro Valle del Cauca por estarse cumplido a cabalidad y con oportunidad los requisitos del art. 4 de la ley 1176 de 2007. En caso que no se proceda el recurso de reposición ante el delegado, solicito proceda a dar traslado automáticamente al subsidio del recurso de apelación ante el Superintendente de Servicios Públicos domiciliarios.

#### 2.2. De las pruebas relacionadas en el recurso.

Con el radicado No. SSPD 20165290854242 del 14 de diciembre del 2016, por medio del cual se sustentó el recurso de reposición, se allegó para ser tenida en cuenta como prueba una certificación expedida por el Secretario Técnico del Comité Permanente de Estratificación de fecha 13 de diciembre del 2016, en la cual hace constar que la estratificación aplicada en vigencia 2015 estuvo conforme a la metodología nacional establecida.

El anterior documento en su valor integral se anexa al expediente.

### 3. ANÁLISIS DE LOS ARGUMENTOS

Para determinar si le asiste razón a la parte recurrente, esta Superintendencia procederá a analizar los argumentos expuestos en el escrito de reposición, lo cual efectuará de la siguiente manera:

**3.1 Argumentos expuestos sobre el cumplimiento del requisito relacionado con el "Reporte en el SUI de la certificación expedida por la Secretaría Técnica del Comité Permanente de Estratificación Municipal o Distrital o quien haga sus veces, en la que conste que la estratificación aplicada en la vigencia a certificar está conforme a la metodología nacional establecida."**

El Municipio de Toro no cumplió este requisito, toda vez que reportó en el SUI el 19 de abril del 2016, una certificación expedida por el Secretario Técnico del Comité Permanente de Estratificación, que no proporciona una respuesta clara de cara a la exigencia normativa; por tal razón se decretó un periodo probatorio mediante el auto No. SSPD 20164010019626 para que la entidad territorial aclarara la situación en comento, sin embargo en respuesta al mismo el municipio allegó un documento que reprodujo el contenido de la certificación inicialmente cargada, por lo que se declaró como incumplido este requisito.

Al respecto señala la recurrente, que dicho reparo obedece a una simple ritualidad de carácter formal y que para aclarar tal circunstancia anexa acta del mencionado Comité en los términos exigidos por la superintendencia, no obstante, menciona que el contenido material de la primera acta implica que la metodología aplicada es la vigente.

Por lo anterior invoca el principio de la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, que busca que las formalidades no impidan el logro de los objetivos del derecho sustancial, porque considera que la Superintendencia de Servicios Públicos no ha demostrado que el municipio no cumpla con el literal c) de la ley 1176 de 2007, en razón a que lo consignado en un acta es una mera formalidad que no prima sobre la sustancial, que a la postre se concreta en que efectivamente el municipio si sometió la estratificación socioeconómica de 2015 a las metodologías nacionales establecidas.

Ahora bien, este Despacho considera adecuado iniciar el análisis de los argumentos del recurrente, verificando qué documentos fue los que allegó el ente territorial, que llevó a calificar como incumplido el requisito que hoy nos ocupa, encontrando lo siguiente:

Certificación reportada en el aplicativo Inspector del SUI, el 19 de abril del 2016.

**LA SECRETARIA TÉCNICA DEL COMITÉ PERMANENTE DE  
ESTRATIFICACIÓN DEL MUNICIPIO DE TORO VALLE DEL CAUCA  
CERTIFICA QUE:**

El municipio de TORO VALLE DEL CAUCA tiene adoptadas las Estratificaciones para el sector Urbano (Decreto 013 de Febrero 28 de 1995), para centros poblados (Decreto 040 de Junio 22 de 1996) y zona rural (Decreto 031 de Marzo 18 de 2004) cumpliendo con la asignación de los estratos conforme a la metodología nacional establecida.

La presente certificación se firma a los 19 días del mes Abril de 2016

Así mismo, en respuesta al auto de pruebas No. SSPD 20164010019626, el alcalde allegó el siguiente documento:

Señores Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios  
Sistema Único de Información - SUI  
Reporte al SUI

**LA SECRETARIA TÉCNICA DEL COMITÉ PERMANENTE DE  
ESTRATIFICACIÓN DEL MUNICIPIO DE TORO VALLE DEL CAUCA  
CERTIFICA QUE:**

**El municipio de TORO VALLE DEL CAUCA tiene adoptadas las Estratificaciones para el sector Urbano (Decreto 013 de Febrero 23 de 1995), para centros poblados (Decreto 040 de Junio 22 de 1996) y zona rural (Decreto 031 de Marzo 18 de 2004) cumpliendo con la asignación de los estratos conforme a la metodología nacional establecida.**

**Los anteriores Decretos estuvieron vigentes en el año 2015.**

**La presente certificación se firma a los 29 días del mes de Septiembre de 2016.**

De las imágenes precedentes, es claro concluir que los documentos allegados certifican los Decretos mediante los cuales se adoptó la estratificación urbana, de los centros poblados y de la zona rural del Municipio de Toro y la vigencia de los mismos para el año 2015, pero para este Despacho, no es posible entender de las afirmaciones en ellas consignadas, que la estratificación aplicada en la vigencia 2015, estuvo conforme a la metodología nacional establecida.

El requisito consagrado en el artículo 2.3.5.1.2.1.6. del Decreto 1077 del 2015, es inequívoco al señalar que para acreditarse requiere que el Secretario Técnico del Comité Permanente de Estratificación, certifique que la estratificación aplicada para 2015 estuvo conforme a la metodología nacional establecida, toda vez que constituye función del Comité Permanente de Estratificación velar por la adecuada aplicación de las metodologías de estratificación y esa es la razón por la cual el Decreto 1077 estableció que es el llamado a expedir tal certificación.

Pues bien, frente a este interrogante la respuesta puede ser positiva o negativa, toda vez que una cosa es que el Decreto de estratificación se ajuste a las normas que rigen la materia y otra que la estratificación se haya aplicado en el año 2015 de acuerdo con la metodología nacional, ya que existe divergencia entre adoptar y aplicar, por eso el mismo Decreto 1077 del 2015 separa estos términos en dos requisitos diferentes, es así como el aspecto denominado "Aplicación de la estratificación socioeconómica, conforme a la metodología nacional establecida" contentivo de tres exigencias a saber, requiere en primer término el reporte del Decreto de adopción y seguidamente el reporte de la certificación que versa sobre la aplicación.

En este entendido, resulta claro que las certificaciones objeto de revisión no satisfacen lo requerido por la norma, toda vez que certifican una cosa distinta a la solicitada.

No obstante lo anterior, es importante tener en cuenta que el Municipio de TORO demostró una clara intención de cumplir con este requisito, como quiera que desplegó sus esfuerzos a fin de acreditarlo con oportunidad, gestión que este Despacho no desconoce, razón por la cual se considera pertinente evaluar la certificación allegada con el escrito de reposición, veamos:

Toro, Valle del Cauca, Diciembre 13 de 2016

Señores:  
**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS  
 PÚBLICOS DOMICILIARIOS**  
 Sistema Único de Información – SUI  
 Reporte al SUI

**LA SECRETARIA TÉCNICA DEL COMITÉ PERMANENTE DE  
 ESTRATIFICACIÓN DEL MUNICIPIO DE TORO VALLE DEL CAUCA**

**CERTIFICA QUE:**

El municipio de **TORO VALLE DEL CAUCA** tiene adoptadas las Estratificaciones para el sector Urbano (Decreto 013 de Febrero 28 de 1995), para centros poblados (Decreto 040 de Junio 22 de 1996) y zona rural (Decreto 031 de Marzo 18 de 2004).

La estratificación aplicada en la vigencia 2015 estuvo conforme a la metodología nacional establecida.

La presente certificación se firma a los 13 días del mes de Diciembre de 2016.

  
**JULIÁN MAURICIO RÍOS G.**  
 Presidente C.P.D.E

  
**CARLOS HUMBERTO BEDOYA M.**  
 Secretario C.P.D.E

Es indiscutible que esta última certificación, en efecto, procura una respuesta positiva de cara a la exigencia normativa, porque hace constar con claridad que la estratificación aplicada en la vigencia 2015, estuvo conforme a la metodología nacional.

Así las cosas, de conformidad con lo establecido en el artículo 228° de la Constitución Política, que demanda la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal y en virtud del principio de eficacia establecido en el artículo 3° del C.P.A.C.A., este Despacho estima que la certificación allegada con el recurso de reposición aclara y complementa la información reportada con oportunidad, por lo cual es pertinente tener como cumplido este requisito, por las razones expuestas.

Al respecto, la Corte Constitucional en Sentencia T – 268 del 2010, manifestó lo que sigue:

*"La Corte Constitucional ha señalado que, por disposición del artículo 228 Superior, las formas no deben convertirse en un obstáculo para la efectividad del derecho sustancial, sino que deben propender por su realización. Es decir, que las normas procesales son un medio para lograr la efectividad de los derechos subjetivos y no fines en sí mismas. Ahora bien, con fundamento en el derecho de acceso a la administración de justicia y en el principio de la prevalencia del derecho sustancial, esta Corporación ha sostenido que en una providencia judicial puede configurarse un defecto procedimental por "exceso ritual manifiesto" cuando hay una renuncia consciente de la verdad jurídica objetiva evidente en los hechos, por extremo rigor en la aplicación de las normas procesales."*

En este orden de ideas, se evidencia que el ente territorial cumplió el requisito relacionado con el reporte en el SUI de la certificación expedida por el Secretario Técnico del Comité Permanente de Estratificación y por lo tanto, el recurso formulado por el señor Julián Antonio Bedoya Meneses como representante legal del Municipio de TORO, prospera y en consecuencia la resolución recurrida será revocada.

### 3.2 Del recurso subsidiario de apelación.

Manifiesta el impugnante que frente al acto administrativo No. SSPD 20164010056005 del 30 de septiembre de 2016, expedido por el Superintendente delegado de Agua Potable y Saneamiento Básico procede el recurso de reposición con subsidio de apelación, el cual interpone contra el acto disertado.

Es necesario aclararle al recurrente que contra la Resolución No. SSPD 20164010056005, no procede el recurso de apelación, tal como lo señala el numeral 2, del artículo 74 del C.P.A.C.A., veamos:

**"ARTÍCULO 74. RECURSOS EN LA VÍA GUBERNATIVA:** Por regla general, en contra los actos definitivos procederán los siguientes recursos:

(...)2. El de apelación, ante el inmediato superior administrativo, con el mismo propósito.

*No habrá apelación de las decisiones de los Ministros, Directores de Departamento Administrativo, Superintendentes y representantes legales de las entidades descentralizadas ni de los directores u organismos superiores de los órganos constitucionales autónomos."*(...)" (Subrayado fuera de texto).

Así pues, es claro que las decisiones adoptadas por el Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, no están sujetas a ser impugnadas mediante el recurso de Apelación.

Como quiera que, la función de expedir los actos administrativos mediante los cuales se decida sobre la certificación relacionada con la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones para agua potable y saneamiento básico fue delegada por la Superintendente de Servicios Públicos al Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo mediante la Resolución No. 20111300032265 del 21 de octubre de 2011, las decisiones que expida este funcionario en virtud de estos actos administrativos serán susceptibles solamente del recurso de reposición. Dicha delegación tiene como fundamento los Artículos 9 a 10 de la ley 489 de 1998.

Además, el artículo 12 de la Ley 489 de 1998 dispone que: "Los actos expedidos por las autoridades delegatarias estarán sometidos a los mismos requisitos establecidos para su expedición por la autoridad o entidad delegante y serán susceptibles de los recursos procedentes contra los actos de ellas". Con fundamento en esta norma, se expidió la Resolución de delegación.

Al respecto la Corte Constitucional señaló: "Decisiones del delegatario. El delegatario toma dos tipos de decisiones: unas, para el cumplimiento de las funciones del empleo del cual es titular, y otras, en ejercicio de la competencia delegada, para el cumplimiento de las correspondientes funciones del empleo del delegante. En estricto sentido, es frente a estas últimas que se actúa en calidad de delegatario pues en el primer evento él no es delegatario sino el titular de su empleo. Además, las decisiones que toma en calidad de delegatario tienen el mismo nivel y la misma fuerza vinculante como si la decisión hubiese sido tomada por el delegante y, se asume, "que el delegado es el autor real de las actuaciones que ejecuta en uso de las competencias delegadas, y ante él se elevan las solicitudes y se surten los recursos a que haya lugar, como si él fuera el titular mismo de la función".<sup>1</sup>

Así mismo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca señaló respecto de este tema:

"Con relación a ese preciso aspecto, es del caso poner de presente que, de conformidad con las disposiciones procedimentales generales contenidas en la Parte Primera del Código Contencioso Administrativo (artículos 1 a 81) y las normas que regulan los procedimientos administrativos especiales, para la procedencia del recurso de apelación se requiere la configuración de dos presupuestos, a saber: a) que exista un funcionario superior jerárquico respecto de aquel que profiere la decisión objeto del recurso, por cuanto, en atención a la naturaleza y esencia del mismo, se requiere se sea conocido y resuelto por una autoridad o funcionario que se encuentre en un nivel jerárquico superior al que emitió la decisión, y b) que la ley no haya prohibido la procedencia de tal recurso.

Desde esa óptica, en el presente caso objeto de examen, es evidente la ausencia del primer presupuesto exigido para la procedencia del recurso de apelación, dado que, en virtud de la delegación efectuada mediante la resolución SSPD 7605 de 23 de mayo de 2002, el Director Territorial Centro de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios investigó y sancionó a la ETB S.A. ESP y materializó la respectiva decisión a través de la expedición de los actos administrativos demandados, actuación en la que obró como si fuese la autoridad delegante, esto es, el mismo Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, funcionario éste que no tiene superior jerárquico.

<sup>1</sup> Corte Constitucional. Sentencia C-372 del 15 de mayo 2002. MP Jaime Córdoba Triviño



*En tales condiciones, no encuentra esta Sala de Decisión que con la expedición de los actos administrativos demandados, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios haya violado el derecho constitucional fundamental del debido proceso, ya que dio estricta aplicación a las normas procedimentales del régimen de servicios públicos domiciliarios, por cuanto, si bien la decisión en ellos contenida fue expedida por el Director Territorial Centro - funcionario éste que tiene superior jerárquico-, lo hizo en ejercicio de una función delegada por parte del Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, quien dentro de la estructura de dicha entidad no tiene superior jerárquico que resuelva los recursos de apelación interpuestos contra sus decisión, lo cual hace que no se configuren los presupuestos a los que se ha hecho referencia.*

*Por consiguiente, en ningún momento se desconocieron las disposiciones contenidas en las normas que regulan los servicios públicos, ya que, con base en el artículo 113 de la ley 142 de 1998, en concordancia con los artículo 12 de la ley 489 de 1998 y 50 del C.C.A., se estableció que contra las decisiones adoptadas por el Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios no procede el recurso de apelación; por lo tanto, al haber actuado el Director Territorial Centro en cumplimiento de un acto de delegación emitido por el mismo superintendente, es claro que no procede el recurso de alzada por haber actuado como si fuera tal funcionario".<sup>2</sup>*

Como corolario de lo expuesto, en razón de que el Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo es delegatario de funciones delegadas por el Superintendente de Servicios Públicos, los actos administrativos que dicte son susceptibles únicamente de los recursos que proceden contra las decisiones que profiera la Superintendente (delegante), y que por no tener superior jerárquico, sólo procede el recurso de reposición.

En mérito de lo expuesto, el Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo,

#### **RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.- RECHAZAR POR IMPROCEDENTE** el recurso subsidiario de apelación, de conformidad con lo dispuesto artículo 74 del C.P.A.C.A

**ARTÍCULO SEGUNDO.- REVOCAR** la Resolución No. SSPD 20164010056005 del 30 de septiembre de 2016, proferida por el Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente Resolución.

**ARTÍCULO TERCERO.- CERTIFICAR** al Municipio de TORO del Departamento de VALLE DEL CAUCA, en relación con la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones para agua potable y saneamiento básico.

**ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR** personalmente de la presente Resolución al alcalde del Municipio de TORO del Departamento de VALLE DEL CAUCA, haciéndole entrega de una copia de la misma, y advirtiéndole que contra ésta no procede recurso alguno. De no ser posible la notificación personal, se debe dar aplicación al artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

**ARTÍCULO QUINTO.- COMUNICAR**, una vez en firme, el contenido de la presente Resolución al gobernador del Departamento de VALLE DEL CAUCA, al Departamento Nacional de Planeación, al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y publicar en la página web de la SSPD.

**ARTÍCULO SEXTO.-** La presente Resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria y contra ella no procede recurso alguno.

**NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚPLASE**

Dada en Bogotá, D. C.



**JULIÁN DANIEL LÓPEZ MURCIA**  
Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo

Proyectó: María Eugenia Sierra Botero - Coordinadora Grupo de Certificaciones e Información  
Revisó: Julián Daniel López Murcia - Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo

<sup>2</sup> Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Sentencia del 4 de diciembre de 2008. Exp. No. 2005-00847-02.